



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

ASUNTO	Apelación de sentencia- Ejecutivo singular
DEMANDANTE	Itaú Corpbanca Colombia S.A.
DEMANDADO	Juan Pablo Campo Campo
DECISIÓN	Modifica sentencia
PROCESO RDO.	05001-31-03-010-2018-00319-01

Medellín, tres de mayo de dos mil veintitrés

ANTECEDENTES

1. DEMANDA: Itaú Corpbanca Colombia S.A. demandó en proceso ejecutivo a Juan Pablo Campo Campo, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de \$149'405.293 junto con los intereses moratorios causados desde el 12 de diciembre de 2017, estos últimos, calculados sobre la suma de \$141'800.356. La obligación se deriva de 3 créditos de libranza otorgados por el banco demandante en favor del ejecutado.

2. CONTESTACIÓN: El demandado Juan Pablo Campo Campo, notificado en forma personal el 8 de febrero de 2019 (fol. 46), quien actúa por medio de apoderado judicial, presentó contestación a la demanda e interpuso las excepciones que denominó: *i)* pago parcial: en atención a los abonos realizados mes a mes a la deuda; *ii)* ausencia de crédito de libranza: con la advertencia de no haber autorizado la deducción bajo modalidad de libranza frente a 1 de los 3 créditos por los cuales se ejecuta; *y, iii)* solidaridad del empleador por el pago de la obligación: resaltó que por la modalidad de crédito de libranza que se alega, el empleador es responsable solidariamente por los descuentos de nómina no efectuados.

3. SENTENCIA. En decisión de 17 de mayo de 2019, el Juzgado 010 Civil del Circuito de Medellín resolvió:

"PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de pago parcial, propuesta por el ejecutado, señor JUAN PABLO CAMPO CAMPO y tener como abono al capital que hoy se reclama, las sumas descontadas al demandante mes a mes, de su nómina.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones AUSENCIA DE CRÉDITO DE LIBRANZA Y SOLIDARIDAD DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN.

(...)".

El juez de primera instancia, expuso que, como base de recaudo se allegó el Pagaré No. 4095041534861281, el cual reúne los requisitos de que tratan los artículos 621 y 709 del Código de Comercio, y 422 del Código General del Proceso; por lo que presta mérito para ser demandado por la vía ejecutiva. Señaló que, en el curso del proceso, el demandado no desconoció la firma del pagaré ni las obligaciones contraídas; advirtió que las constancias de pago que sustentan la excepción de pago parcial propuesta, solo dan cuenta de los descuentos efectuados en relación con uno de los créditos adquiridos, y que no existe prueba de lo informado en cuanto a que, el desembolso de uno de los créditos se hizo sin la aceptación del deudor.

El sentenciador también expuso que el proceso ejecutivo no es el escenario para debatir la posible solidaridad del empleador frente a los descuentos de nómina no efectuados, porque el debate no gira en torno a que el empleador haya materializado o no las deducciones salariales y concluyó que la excepción de pago parcial prosperaba respecto de los descuentos de nómina hechos al demandado según los comprobantes de pago allegados al proceso, con la advertencia de que tales pagos se tendrían como abono al capital por el cual se demandó.

4. APELACIÓN. Inconforme con lo resuelto, la parte ejecutada presentó recurso de apelación frente a la sentencia. Dijo que esta carece de claridad y precisión porque no especificó frente a cuál de los créditos prosperó la excepción de pago parcial, sumado a que no indicó el monto de los valores reconocidos por tal concepto. Refirió que el juzgador de primera instancia valoró indebidamente los documentos visibles a folios 53, 54 y 55, pues aludió a ellos como

proyección de pagos, cuando correspondían al histórico de los pagos cancelados frente a cada una de las obligaciones ejecutadas.

Finalmente, anotó que la parte considerativa de la sentencia mencionó que los descuentos de nómina serían suspendidos por sustracción de materia, no obstante, en la parte resolutive no se impartió orden a la Secretaría de Educación para que efectivamente suspendiera los descuentos que se hace al demandado, por lo que solicitó el pronunciamiento al respecto.

5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA.

5.1. Para sustentar el recurso, la parte demandada reiteró en su integridad los argumentos expuestos al momento de presentar la alzada.

5.2. La parte demandante sostuvo que en virtud de la mora en que el extremo procesal accionado incurrió, se presentó demanda ejecutiva en ejercicio de la acción cambiaria. Apuntó que una vez librado el mandamiento de pago, el ejecutado no hizo el pago de la obligación –total o parcial- en los términos que fue ordenado por el *a quo*. Adujo que los documentos allegados como respaldo del pago de la obligación obedecían a una proyección de pagos y no a comprobantes de un pago parcial de la obligación. Con todo, señaló que, para acreditar un pago parcial, el mismo debió hacerse previo a la presentación de la demanda, lo cual no ocurrió, puesto que los pagos alegados fueron descontados con posterioridad a ello, por consiguiente, se les debía catalogar como abonos y ser tenidos en cuenta al momento de la liquidación del crédito, esto aunado a que debían ser imputados en los términos del artículo 1653 del Código Civil.

CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO. De acuerdo con los cuestionamientos que el recurrente plantó frente a la sentencia, a esta sala le corresponde definir -en síntesis- si la orden de pago frente a las obligaciones perseguidas por el Banco Itaú Corpbanca S.A., debe ser modificada porque no es claro el monto que se reconoce por concepto de pago parcial y su imputación a las obligaciones ejecutadas.

2. MARCO NORMATIVO Y DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA PARA LA DECISIÓN DEL CASO EN CONCRETO.

2.1. El pago que está previsto en el ordenamiento jurídico como forma de extinguir las obligaciones (art. 1625, núm. 1 del Código Civil), consiste en ejecutar la prestación de lo que se debe y según las normas que lo regulan tiene que hacerse *"al tenor de la obligación"* (arts. 1626 y 1627), reglas estas de plena aplicabilidad a los negocios mercantiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio.

2.2. El numeral 7 del artículo 784 del Código de Comercio, dispone que contra la pretensión cambiaria podrá proponerse las excepciones *"que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título"*.

Ahora bien, cuando dicho pago no obre en el propio título, o cuando por el pago total de la obligación no se haya dado cumplimiento al artículo 624 del Código de Comercio, el cual dispone que *"Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague"*, lo cierto es que ello no significa que la constancia en el propio título sea el único medio idóneo para probar la existencia del pago, sino que implica una tarea probatoria más ardua, sobre todo cuando exista diversas relaciones de negocio entre las partes que pueden dar cabida a la imputación de pagos, caso en el cual la excepción se torna personal (art. 784. 13 ib.).

2.3. Por otra parte, el artículo 1757 del Código Civil, dispone que *"Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta"*. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- en sentencia de tutela de 24 de febrero de 2012¹, expuso:

"Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este

¹ EXP.:T. No. 54001-22-13-000-2011-00274-01.

medio de defensa surge nítido, por tanto, que aquél expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue el actor, enervando la pretensión.

"En torno a este preciso punto, la Corte ha señalado: "[l]a defensa en sentido estricto estriba en la negación del derecho alegado por el demandante. Y la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del primero y por lo mismo, la acción. (...) De consiguiente, la excepción perentoria, cualquiera que sea su naturaleza, representa un verdadero contraderecho del demandado, preexistente al proceso y susceptible de ser reclamado generalmente a su vez como acción" (Sentencias de Casación Civil de 31 de julio de 1945, G. J. t. LX pág. 406; 9 de abril de 1969, G. J. t. CXXX pág. 16 y 25 de enero de 2008, entre otras).

"En concordancia con lo que se viene diciendo, tocante con la carga de la prueba, ha de verse cómo el artículo 1757 del Código Civil prevé que "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta", a la vez que según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", normas de las cuales se deduce con facilidad que corresponde verificar los hechos a quien los alegue, para así poder obtener los efectos derivados de los mismos. Por consiguiente, deviene palmario que es de cargo de las partes probar a cabalidad la existencia de sus obligaciones o su extinción, cuando así lo aleguen como supuestos de su acción o excepción, y ello, valga repetirlo, no es más que una aplicación del principio de la carga de la prueba en orden al cual le compete al sujeto procesal que reclama unos hechos forzosamente demostrarlos, si aspira deducir algún beneficio a su favor.

"De ahí que sobre el particular, haya enfatizado la Corte que "es un deber procesal demostrar en juicio el hecho o acto jurídico de donde procede el derecho o de donde nace la excepción invocada. Si el interesado en dar la prueba no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida, o se equivoca en su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso a sus pretensiones" (G. J. t. LXI, pág. 63)".

3. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO. El recurrente, al interponer el recurso de alzada, acusó que la sentencia de primera instancia carecía de claridad y precisión, porque no se indicó a cuál obligación fueron imputados los pagos parciales examinados, ni el monto reconocido por tal concepto. Se reprocha la indebida valoración de las pruebas aportadas y, finalmente, se refiere que la parte motiva de la sentencia hace referencia a la suspensión de los descuentos en nómina que mes a mes se hace al demandado, no obstante, no se libró orden alguna en tal sentido.

3.1. Frente al primer reproche planteado, resulta suficiente advertir que el documento aportado como base de recaudo corresponde al pagaré No. 4095041534861281, por medio del cual el demandando Juan Pablo Campo Campo se obligó a cancelar el 12 de diciembre de 2017, a la orden de Banco Corpbanca Colombia S.A. – hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., la suma de \$149'405.293 junto con los intereses moratorios calculados sobre la suma de \$141.800.356.

En ese orden, los pagos cancelados por la parte demandada, solo podrán considerarse como pago parcial o abonos -según se establecerá más adelante- frente al título valor objeto de la ejecución, en el cual se vierte las obligaciones adquiridas por el ejecutado mediante 3 créditos de libranza. A la vez que, en sede judicial, no podrán imputarse estos pagos o abonos a cada uno de los créditos individualmente considerados.

Lo anterior es así, debido a que en el instrumento ejecutivo se pactó la cláusula aceleratoria del plazo, según la cual, la cuantía del pagaré *"sería igual al monto de las sumas que conjunta o separadamente, por créditos, sobregiros, cartas de crédito, pago de garantías o aceptaciones bancarias, o por cualquier otro concepto, tanto por capital como por intereses o comisiones, llegue a deber al banco el día en que sea llenado. Si se presenta incumplimiento o simple retardo en el pago de cualquiera de las obligaciones a mi cargo, El Banco quedará facultado para acelerar el vencimiento y para exigir anticipadamente el pago de todas las sumas de dinero adeudadas"*.

De esta manera, la aceleración del plazo comprende los 3 créditos adquiridos por el señor CAMPO CAMPO con el Banco demandante, y en tal sentido, los

pagos que a partir de la fecha de exigibilidad del título valor se haya hecho o con posterioridad efectúe el demandado, no serán imputados directamente a alguno de los créditos previamente adquiridos, sino que, lo serán al título valor que se ejecuta y contiene todas las obligaciones adquiridas por el ejecutado con el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. conforme quedó pactado en el título valor pagaré y su respectiva carta de instrucciones; por lo que se concluye que sobre este aspecto fue acertada la decisión de primera instancia.

3.2. El segundo reproche en que se basa la apelación, gira en torno a la indebida valoración de los documentos denominados "*Histórico facturas y proyección de pagos*" (fs. 53, 54 y 55); que a juicio del accionado corresponde a los pagos que se han llevado a cabo frente a cada uno de los créditos contratados con el demandante; y que fueron valorados por el juez de primer grado como proyección de pagos, lo que conllevó a que estos no fueran considerados como pagos efectivos. Sobre este punto, basta advertir que los documentos señalados fueron presentados por el mismo demandado como proyección de pagos, y no como comprobante de los pagos efectuados; así lo afirmó en el acápite de pruebas de la contestación a la demanda (Fol. 50). De tal suerte que ahora, por vía de apelación, el ejecutado no puede pretender que se dé un alcance diferente a dichos documentos, puesto que, ello comportaría la vulneración del derecho de defensa y contradicción de la parte demandante, quien controvertió las pruebas conforme le fueron presentadas.

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que a la par de los documentos antes referidos, el demandado allegó una serie de comprobantes de nómina, en los que consta las deducciones hechas por su pagador en favor del Banco demandante. En razón de ello, y por haberse pactado el pago del crédito bajo la modalidad de libranza, es a estos documentos a los que deben darse pleno valor probatorio como comprobantes de los pagos cancelados por el ejecutado. (Fs. 56 a 93). Sin embargo, debe anotarse que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido, solo serán pagos parciales aquellos materializados antes de la interposición de la demanda, mientras que los pagos hechos con posterioridad a ella, se tendrán como abonos a la obligación susceptibles de valoración al momento de efectuar la liquidación del crédito.

Sobre la diferencia procesal entre "pago parcial" y "abono", explica la Corte Suprema de Justicia: *"Es del caso aclarar, por cuanto ello incumbe a este asunto, que las sumas entregadas en data pretérita a la de la presentación de la demanda en cada caso instaurada son exclusivamente las que se pueden tener como «pago» -ya parcial ora total-, dado que al haber operado antes de la promoción de las pretensiones en tal sentido elevadas, se erigen como verdaderos montos extintivos de la acreencia perseguida; los demás valores, o sea, los sufragados con posterioridad de aquel hito procedimental, se reputan «abono»"*².

Bajo este entendimiento, la Sala habrá de modificar y adicionar la sentencia de primera instancia, para definir que se tendrá como pagos parciales aquellos descuentos de nómina efectuados entre la fecha en que el demandando incurrió en mora -12 de diciembre de 2017- y hasta la fecha de interposición de la demanda -26 de junio de 2018. De esta manera, serán pagos parciales aquellos que corresponden a los descuentos de nómina de los meses de diciembre de 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018, por valor de \$1.242.782, por cada mes, los cuales deben ser imputados en la fecha en que se hicieron, primero a intereses y luego a capital, conforme con lo previsto en el artículo 1653 del Código Civil.

De otro lado, los pagos posteriores a la fecha de presentación de la demanda, deberán considerarse abonos a la obligación, que han de ser tenidos en cuenta por el *a quo* al momento de la liquidación del crédito, los cuales se deberá imputar en los términos del artículo 1653 del Código Civil, conforme la Corte Suprema de Justicia expuso en la sentencia STC5993 de 09 de mayo de 2018:

"Ahora bien, la «liquidación del crédito» tiene por objeto concretar el valor económico de la obligación cobrada forzosamente, es decir, tal operación busca determinar el preciso capital adeudado a la hora de ser promovida la «demanda» y los intereses reclamados, de manera que si en el curso del proceso se efectúan abonos, como ocurrió en el sub lite, según concluyó la jueza acusada al analizar «el reporte de pagos [sic] efectuado a la cuenta de depósitos judiciales de[] despacho judicial», las erogaciones económicas que el ejecutado realice en pro de extinguir la pretensa obligación tras ser formulada la demanda, sin ninguna otra

² STC5993 de 09 de mayo de 2018.

justificación, necesariamente han de imputarse al valor adeudado, en la forma que lo dispone la ley sustantiva civil (art. 1653 del C. C.).

3.3. El último punto de inconformidad, gira en torno a la falta de orden expresa para suspender los descuentos de nómina que hace la Secretaría de Educación Departamental al demandado Juan Pablo Campo Campo; aspecto que fue objeto de consideración en la parte motiva de la sentencia.

El artículo 287 del Código General del Proceso, sobre la adición de sentencias, preceptúa:

"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal."

De conformidad con la norma transcrita, procederá la adición o complementación de la sentencia, cuando se omita resolver sobre alguna cuestión que por mandato legal debía ser objeto de pronunciamiento, o cuando se omita solución sobre alguno de los asuntos que fueron sometidos a consideración del Juez.

Pues bien, del estudio de la demanda, la contestación y del título valor objeto de recaudo, se concluye que las deducciones de nómina a que hizo referencia el juez de primera instancia en la parte considerativa de la sentencia, no fue un asunto sometido a su consideración, ni se trata de aquellos que por orden legal deban ser objeto de pronunciamiento.

De otro lado, consideró el *a quo* la procedencia de dicha orden por sustracción de materia, conclusión de la cual se aleja la Sala, puesto que nada impide que frente a una obligación ejecutada judicialmente se continúe efectuando abonos extrajudiciales, como ocurriría en este asunto, como tampoco se evidencia una sustracción de materia si se considera que la obligación continúa con un saldo impagado y debe propenderse por la cancelación total de la misma.

En ese orden, y en atención a que el reproche en cuestión no fue sometido a debate en el juicio, ello impide en esta instancia un pronunciamiento sobre el particular para que así no se afecte la congruencia de la sentencia.

4. Así las cosas, sin necesidad de ahondar en aspectos adicionales, el Tribunal advierte que la decisión de primera instancia debe ser modificada. No se condenará en costas en esta instancia, debido a la prosperidad parcial de la alzada. (Art. 365 numeral 5 del Código General del Proceso)

DECISIÓN

Por lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR la sentencia apelada proferida el 27 de mayo de 2019 por el Juzgado 010 Civil del Circuito de Medellín, por lo que su numeral PRIMERO quedará así:

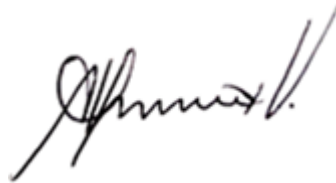
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de pago parcial, propuesta por el ejecutado, señor JUAN PABLO CAMPO CAMPO, para tener como pago parcial de la obligación, aquellas sumas de dinero que corresponden a los descuentos de nómina hechos al demandado en los meses de diciembre de 2017, enero,

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018, por valor de \$1.242.782, por cada mes, los cuales deben ser imputados en las fechas que se hicieron, primero a intereses y luego a capital, conforme con lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil.

SEGUNDO. En lo demás, se CONFIRMA la sentencia de primera instancia. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA

RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ
(En permiso)



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN